

Utilización de datos del Registro de Vehículos para un fin incompatible con el derivado del interés apreciado para acceder al Registro. Informe 184/2006

La consulta plantea la conformidad o no con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, de la conducta descrita en la misma, en cuya virtud una determinada persona obtuvo del Registro de Vehículos los datos referidos al vehículo del que es titular un cargo público y los facilitó a un tercero, no identificado, para su difusión en forma de fotocopias repartidas en distintas dependencias administrativas de la Comunidad Autónoma así como en los parabrisas de los vehículos que se encontraban en las proximidades de la sede de las mismas.

Según se desprende de la consulta, la persona que obtuvo el certificado de la Jefatura Provincial de Tráfico ejerce la profesión periodística aunque no utilizó los datos en el ejercicio de dicha profesión y los facilitó a terceras personas con la finalidad de obtener esa divulgación masiva.

Para dar adecuada respuesta a la cuestión planteada debe en primer lugar analizarse el acceso por parte de la persona que obtuvo el certificado divulgado al Registro de Vehículos.

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no será necesario el consentimiento del afectado “cuando la cesión está autorizada en una Ley ” (artículo 11.2 a).

El artículo 5 h) del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que “se atribuyen al Ministerio del Interior las siguientes competencias en el ámbito de esta Ley, sin perjuicio de las que tengan asumidas las Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos ... h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento para conductores de vehículos a motor y de manipulación de placas de matrícula, en la forma que reglamentariamente se determine”.

En consecuencia, el citado precepto reconoce la subsistencia del Registro de Vehículos, creado por el artículo 244 del Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, habilitando expresamente al desarrollo reglamentario del Texto Refundido para establecer el régimen del citado Registro.

Dicho desarrollo se produjo a través de la aprobación del Reglamento General de Vehículos, en virtud de Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, cuyo artículo segundo establece en su párrafo primero que “la Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los vehículos

matriculados, que adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el que figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o licencia de circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad”.

En cuanto a su finalidad, el párrafo segundo del precepto previene que “estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones realizadas, de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras obligaciones legales, a la constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines estadísticos”.

Por último, y en lo atinente a la publicidad de sus datos, el párrafo tercero del citado artículo 2 añade que “el Registro de Vehículos ... será público para los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones”. En consecuencia, se establece el carácter público del Registro, bastando para la consulta de sus datos la alegación de la existencia de un interés legítimo y directo en la consulta.

En todo caso, debe señalarse que el concepto de interesado (o afectado) ofrecido por la Ley Orgánica 15/1999, limitado a la persona física cuyos datos son objeto de tratamiento, no puede identificarse con el concepto de interesado previsto en las normas de nuestro Derecho Administrativo, amparado exclusivamente en la existencia de un interés legítimo, razón por la cual no puede considerarse aplicable el argumento esgrimido en la consulta planteada, que parece identificar ambos supuestos.

Por tanto, siempre que se aprecie la existencia de “interés legítimo y directo” en la consulta de los datos del Registro de Vehículos, la comunicación de los datos contenidos en el mismo, aún no contando con el consentimiento del afectado, resultará conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica (dada la remisión reglamentaria efectuada por el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el carácter público atribuido al Registro de Vehículos), correspondiendo a la Dirección General de Tráfico la apreciación de ese interés y, en su caso, al Ministerio del Interior la posibilidad de promover las correspondientes reformas que permitan limitar total o parcialmente el acceso a los datos del Registro. En tanto no exista un cambio en la normativa vigente, el acceso sería posible en los términos descritos.

En consecuencia, la comunicación de los datos a la persona que solicitó el certificado resulta ajustada a lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante, el problema se plantea en lo referido a la utilización de los datos con posterioridad a la obtención del certificado.

El artículo 11.5 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley”.

El artículo 4.1 de la Ley Orgánica consagra el principio de finalidad en el tratamiento de los datos al dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Este principio se completa con lo dispuesto en el artículo 4.2, que dispone que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Pues bien, habiendo sido obtenidos los datos del Registro en función de

la concurrencia en el solicitante de un interés legítimo y directo para su conocimiento, en los términos establecidos en el Reglamento de Vehículos, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 impone que los datos sean empleados precisamente para esa finalidad legítima vinculada con el interés que justificó su comunicación al solicitante.

Por su parte, el artículo 4.2 impediría la utilización de los datos para un fin incompatible con el derivado del interés apreciado para acceder al Registro, debiendo recordarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, ha venido a sentar la doctrina de que el término “incompatible” debe ser interpretado restrictivamente, debiendo considerarse, con carácter general, asimilado a “distinto”.

Por otra parte, deberá prescindirse del análisis de las consecuencias que pudieran haberse derivado de una divulgación periodística de los datos y de la concurrencia de los derechos a la libertad de expresión y a la protección de datos de carácter personal en ese supuesto, dado que los datos no fueron divulgados a través de esta vía.

Pues bien, la divulgación general de la información obtenida del registro de vehículos no puede en ningún caso ser considerada como la finalidad legítima que permitió al interesado obtener la información de aquél. Ello se debe a que si la normativa reguladora del registro exige la concurrencia en el interesado de un “interés legítimo y directo” en conocer el contenido del mismo, no es posible que pueda apreciarse como justificante del acceso la divulgación de su contenido entre personas respecto de las cuales el responsable del propio Registro no podrá tener conocimiento de la concurrencia del citado interés ni acordar o desestimar un potencial acceso solicitado por las mismas.

En resumen, el interés que justifica la comunicación de los datos y habilita la cesión de los mismos, siendo la finalidad por la que el solicitante tiene los datos en su poder no puede ser la divulgación masiva de la

información, ya que ello priva precisamente al Registro de valorar la concurrencia de los requisitos exigibles para su acceso.

Por este motivo, constando en el expediente que la información fue solicitada del registro precisamente con la finalidad de su divulgación masiva posterior y que dicha finalidad no puede justificar, conforme a lo establecido en

el Reglamento de Vehículos, el acceso al Registro, cabría considerar que la conducta del solicitante que posteriormente distribuyó a terceros la documentación pudiera ser contraria a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999.